
El PRI ante el cambio político, económico y social en México*

**Cristina Hernández,
Javier Hernández y
Sara Magallón**

En la actualidad podemos encontrar numerosos libros y artículos de investigadores y analistas nacionales y extranjeros interesados en la evolución y desarrollo que ha tenido nuestro sistema político. Particularmente en la formación y consolidación de la clase política posrevolucionaria, aglutinada en torno a un partido que logró mantener su hegemonía y dominio en la escena política nacional.

En este trabajo abordamos una serie de textos dirigidos precisamente a ubicar en su justa dimensión la fuerza y debilidad del partido en el poder a lo largo de sus casi setenta años de existencia, como fuente de legitimidad del régimen, gracias a su gran capacidad de adaptación que lo llevó a transfigurarse en

dos ocasiones: de Partido Nacional Revolucionario (PNR) en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y por último en Revolucionario Institucional (PRI).

Los últimos quince años han sido cruciales para el partido. Su hegemonía empezó a cuestionarse a partir de la apertura del régimen, con la reforma política de 1977 que, paradójicamente, surgió con el propósito de legitimar esa hegemonía, al dotar de mayor representación política a la oposición.

En ese sentido, Denise Dresser en su artículo "Muerte, modernización o metamorfosis del PRI: neoliberalismo y reforma partidaria en México" considera el impacto de la liberalización económica y las políticas de ajuste que repercutieron sensiblemente en el nivel de vida de la población, al cuestionar la viabilidad del régimen como una de las principales causas del desgaste del partido oficial desde 1982, lo cual se tradujo en pérdidas electorales y en la recurrencia a otros mecanismos de legitimación como el fraude y la competencia desleal. Ejemplo: Chihuahua 1986.

El partido enfrenta una crisis de credibilidad y representación, pues al abandonar el proyecto revolucionario original, dejó de cumplir su función como instrumento de reclutamiento electoral y de gestionar el bienestar y los beneficios sociales (en la medida en que el proyecto económico dependía del control salarial, el recorte al

* Reseña elaborada como parte del Proyecto Conacyt "El PRI: ajustes internos y estrategias políticas, 1994-1997".

gasto público y la contención de las demandas laborales).

En consecuencia, comenzaron a fortalecerse nuevos actores sociales y nuevas formas de organización, que tendieron a acercarse más a la oposición ante el evidente deterioro del PRI, pues éste enfrentaba una ausencia real de militantes. "La identificación partidaria se basaba más en términos pragmáticos que emocionales [...]. El clientelismo se había vuelto omnipresente. Los seguidores tenían poca lealtad partidaria o sentimientos de solidaridad, ya que se habían acostumbrado a un continuo flujo de recursos" (Dresser, p. 218).

Asimismo, el partido enfrentó pugnas y divisiones internas que se manifestaron, según Dresser, de tres formas:

1. La ruptura entre las esferas administrativas de gobierno, determinada por la llegada de un nuevo cuadro tecnocrático y financiero con escasa carrera partidaria pero cercanos al presidente, los cuales compartían el mismo proyecto económico. Así, al cambiar las áreas tradicionales de decisión de la Secretaría de Gobernación a la de Hacienda y la de Programación y Presupuesto, quedaba fuera del alcance del partido la negociación política y la discusión del programa económico.
2. La defección cardenista. A finales de los ochenta, el PRI reorganizó sus fuerzas a

partir de una base programática distinta, un tanto más pluralista pero aún vertical y excluyente, que en su momento se vio reflejada en los miembros de la denominada "corriente democrática"; contraria al proyecto económico de Miguel de la Madrid, cuestionaba la abierta subordinación del partido a la autoridad presidencial y su distanciamiento ideológico de los principios revolucionarios. Apareció con el propósito de democratizarlo y, de cara a las elecciones federales de 1988, su lucha se encaminó a intentar abrir los procesos internos de selección del candidato presidencial, mediante el ataque a una de las principales facultades metaconstitucionales del presidente: la que le permitía elegir al candidato del PRI a la Presidencia del país.

El autoritarismo del partido se impuso y después de un intenso e infructuoso debate, los miembros de la "corriente" se vieron obligados a abandonar el PRI, al toparse con la inercia de sus dirigentes, comprometidos con las prácticas tradicionales y autoritarias del sistema político; así propiciaron lo que sería la primera gran ruptura, ampliamente explicada por Luis Javier Garrido en su libro titulado:

La ruptura. La corriente democrática del PRI.

Por su parte, Laurence Whitehead, en el artículo "Una transición difícil de alcanzar: la lenta desaparición del gobierno de partido dominante en México", considera que la verdadera ruptura del régimen autoritario podría surgir de un mayor conflicto dentro del partido que conduzca a más divisiones y nuevos alineamientos; aunque el factor decisivo podría ser la relación del PRI con el presidente en turno. "En tanto él exija la subordinación continua del partido y lo recompense de la manera acostumbrada no habrá ruptura profunda de ese sistema." La ruptura implicaría necesariamente la desintegración del presidencialismo, para lograr una "transición a través de la ruptura".

Miguel de la Madrid terminó por imponer a Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial. Esta designación provocó posiciones encontradas entre los sectores corporativos del PRI, los cuales, pese a no estar completamente de acuerdo, terminaron por disciplinarse y aceptar la imposición. Así, todo el partido tuvo que enfrentar el costo político que le produjo una masiva salida de militantes para apoyar a la oposición.

3. El surgimiento de grupos rivales dentro del PRI, que según Dresser están representados por los renovadores —plantean acabar con la férrea disciplina centralista, y abrir el partido a nuevos liderazgos más representativos y democráticos— y los llamados dinosaurios —grupos consolidados durante el régimen de Díaz Ordaz que comenzaron a sentirse atacados por las reformas económicas del presidente y por el imperativo de modernizar al partido—.

Joy Langston estudia la estructura, funcionamiento y fuerza de esos grupos y facciones que componen el PRI. En "Sobrevivir y prosperar, una búsqueda de las causas de las facciones políticas intrarrégimen en México", apunta que las facciones en la burocracia política se formaron por falta de una base electoral que estableciera y reglamentara las formas de selección de nuestros representantes. Las facciones en el PRI son, en realidad, grupos consolidados más por relaciones de lealtad y reciprocidad entre individuos, que no contradicen los compromisos ideológicos y la eficacia administrativa para escalar posiciones.

Existe, en efecto, el riesgo de que los subordinados decidan cambiar de líder o colaborar

con otro, al tiempo que el líder podría no conceder las recompensas prometidas, pero ésta es precisamente una de las claves para entender la estructura de la estabilidad dentro de las facciones.

Según Langston, los compromisos dentro de una camarilla incluyen la discreción y la paciencia como ingredientes fundamentales para garantizar la lealtad y la protección así como la confianza, aun cuando en el corto plazo el líder no consiga una buena posición política.

Siguiendo a la autora, en México todas las posiciones son temporales e inseguras, pero también recuperables. La recuperación se consigue a través del grupo ampliado, que integra a miembros de varios grupos reducidos, los cuales pueden aprovechar estas relaciones para mejorar su situación en caso de que el líder se encuentre en una situación desfavorable y requiera establecer nuevas alianzas para recuperar posiciones.

El presidente encabeza la camarilla triunfadora, y asegura su cohesión y renovación. En ella se encuentran los políticos de alto nivel, particularmente los secretarios de Estado, siendo los más importantes aquellos que tienen mayores posibilidades para acceder a la silla presidencial.

La estructura analizada por Langston es una alternativa vertical frente a criterios democráticos de selección. Las inconformidades originadas por decisiones verticales, cuyas

razones difícilmente pueden ser públicas, no siempre consiguen aplacarse con el otorgamiento de "premios de consolación" dentro de la administración pública. Ejemplo: la "corriente democrática" del PRI.

A medida que el partido dejó de ser un instrumento de reclutamiento de cargos públicos y ante la existencia de otros canales de participación, la mayoría de los priistas que no ven cumplidas sus aspiraciones políticas abandonan el partido para ser postulados por la oposición, sobre todo por el Partido de la Revolución Democrática, producto de la escisión cardenista.

En otra de sus obras, "The PRI governors", Langston analiza los requerimientos que en cuanto a la experiencia política, administrativa y legislativa, deben reunir los priistas para acceder, principalmente, a los Ejecutivos estatales.

Los candidatos idóneos se seleccionan entre los grupos políticos locales más importantes. Este proceso es dirigido por el líder del Comité Directivo Estatal, con la colaboración del presidente municipal de la capital del estado, y los diputados y senadores con mayor peso político en la entidad. La decisión final surge de un acuerdo entre el presidente de la República, el gobernador saliente y el líder local del Partido Revolucionario Institucional.

Durante la selección pueden involucrarse otros actores que, dependiendo de la fuerza con

que cuenten en cada estado, exigen una participación a su favor en la designación del candidato y demandan sea un egresado de sus filas.

Normalmente están representados por cada uno de los sectores del partido, aunque también pueden entrar en la disputa las facciones locales y los caciques mismos.

Los líderes de cada sector poseen un amplio margen de maniobra en sus decisiones. Por ello, durante la etapa inicial de la designación resulta especialmente sencillo favorecer a los miembros afines o perjudicar a los adversarios a través de la exclusión del reparto de puestos administrativos. Entre la dirigencia estatal priista y la nacional pueden surgir forcejeos para determinar los criterios de selección del candidato. La cohesión y la capacidad de liderazgo en el PRI en cada entidad son determinantes en estos casos, para medir el grado de autonomía de sus dirigencias en el nivel local.

Nacionalmente, el método de selección del candidato a la Presidencia fue el tradicional "dedazo": el presidente saliente es el encargado de poner a su sucesor. Sin embargo, en 1988, las presiones internas en el Revolucionario Institucional por abrir el proceso, hicieron que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) expidiera una convocatoria a la Convención Nacional, que sujetó el registro de precandidatos a la disposición de los sectores y de un mínimo de 10 Comités Directivos Estatales o del D.F.,

asegurando al CEN, en virtud del control sobre las instancias locales, que no pudiese haber más candidato que el oficial.

Por vez primera en la historia del partido, el proceso electoral interno se abrió. Se reconocía institucionalmente una lista de seis aspirantes, que pudieron presentar las medidas y propuestas de su programa de gobierno (Luis Javier Garrido, p. 169).

No obstante, Salinas fue el elegido, gracias al ejercicio de este tipo de prácticas antidemocráticas que dejó al partido desmoronado y dividido, frente al fuerte embate opositor.

De ahí que Salinas, una vez en el poder, se abocara a la tarea de reconstruir las coaliciones de apoyo. En su gobierno incorporó a los viejos priistas e incluso a figuras cercanas a sus contendientes (delmazistas y echeverriistas). Esta estrategia le redituó apoyo político. La clase política mexicana comenzó a reagruparse y a cerrar filas.

El declive electoral priista se explica por el gradual abandono de las causas sociales, al dejar de distribuir bienestar y beneficios a la población. Siendo sus bases de apoyo las organizaciones, no los individuos, su actuación se redujo a ser únicamente el "administrador de los acuerdos corporativistas", cuando su función era la de coordinar los sectores, garantizando su autonomía, solucionando sus disputas y asegurando su mejoramiento social". La postura centralista del salinismo absorbió

la capacidad de los sectores para negociar; los pactos sectoriales los dejó en manos del gabinete económico, y fortaleció al ala tecnocrática en aras del programa de reforma económica.

El corporativismo no fue capaz de producir los votos que históricamente habían legitimado al sistema. No obstante, el partido consideró que sus sectores eran la estructura necesaria para lograr gobernabilidad frente a sus planes económicos, aunque reconoció la necesidad de instituir cambios radiales en el partido que lo condujeran a recuperar los espacios perdidos.

Para la vieja clase política, Salinas atacaba a las estructuras del partido que lo sustentaban. Para él, en cambio, el PRI había fallado porque ya no era capaz de cumplir su papel legitimador de la Presidencia, por lo que pretendió revivir el apoyo político a través de la institución presidencial.

Para poder encauzar la modernización de la estructura partidaria ante el establecimiento de nuevas reglas del juego político y el consecuente crecimiento electoral de la oposición, se organizaron las últimas cuatro Asambleas del partido (XIV, XV, XVI y XVII).

La XIV Asamblea definió el interés presidencial por formar un partido de ciudadanos más que de sectores. Sin embargo, dichas propuestas no lograron permear el ánimo del partido, al ser afectados ciertos intereses sectoriales. En la XVI Asamblea estos postulados se echaron para atrás y se manifestó

el descontento priista. Se exigió el regreso al corporativismo, la no imposición de dirigentes locales y se pidió que la selección de candidatos fuera por consulta a la base e incluso que a los candidatos presidenciales los eligiera el Consejo Político Nacional, el cual tenía la capacidad discrecional de decidir los casos en que la consulta no fuera necesaria. No obstante, los priistas no lograron entender cómo encajaría dicho proyecto modernizador en las estructuras del partido.

En 1989, con el triunfo del PAN en Baja California, en el partido surgió la idea de que estaba siendo sacrificado para darle credibilidad a la imagen modernizadora del presidente. Asimismo, las transformaciones en las reglas del juego abrieron mayores oportunidades a la oposición y el PRI comenzó a perder no sólo escaños en el Congreso, sino también gubernaturas.

En 1991 el PRI se recuperó electoralmente. Concentró a sus bases; se preocupó porque los candidatos tuvieran arraigo local; en algunos lugares se llevó a cabo la consulta a la base y se incluyeron en las listas a empresarios locales y nacionales; reconstruyó sus lazos con movimientos urbano-populares mediante el intercambio de votos por beneficios materiales y promesas de gestoría a partir de una nueva estrategia política: el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el cual se convirtió en

la columna vertebral de la estructura neocorporativista y del que se desprendieron también candidaturas y nuevos liderazgos. Contempló las necesidades inmediatas de la clase media baja y de los miembros del sector informal. Logró cierta cohesión social en torno al presidente. Demostró, como plantea Crespo, la flexibilidad del sistema para adaptarse a los nuevos retos.

Sin embargo, las disputas postelectorales en Guanajuato y San Luis Potosí evidenciaron la resistencia de algunos sectores al cambio. Los experimentos de democratización del PRI no fueron del todo satisfactorios; en las elecciones primarias para la elección de candidatos en Nuevo León y Colima se vivieron escenas de fraude entre contendientes, lo cual provocó que el ejercicio se suspendiera. En algunos casos, para mantener la unidad, se evitó la consulta a la base pero, contrariamente a lo esperado, surgieron numerosos conflictos regionales.

La relación de dependencia respecto al Ejecutivo y su vinculación con el Estado hicieron que el PRI gozara implícita y explícitamente de todas las ventajas en las contiendas electorales, frente a una oposición muchas veces dividida y fragmentada que contribuía a la dispersión del voto.

Por otra parte, la experiencia del partido en el gobierno (a pesar de sus errores y fallas) influía para que el electorado prefiriera la continuidad a un

cambio brusco, fenómeno que Laurence Whithead denominó en su momento como "democratización a hurtadillas".

No obstante, el cambio en las reglas del juego y en la cultura política han modificado en gran medida esta percepción. Aunque en las elecciones federales y locales de 1994 y 1997 el PRI confirmó una vez más su fuerza y capacidad de respuesta en escenarios cada vez más competitivos, ha tenido que enfrentar la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y de numerosas plazas, entre ellas seis gubernaturas: Baja California (1989 y 1995), Chihuahua (1992), Guanajuato (1994), Jalisco (1995), Nuevo León (1994), Querétaro, así como la jefatura de gobierno del Distrito Federal (1997), las cuales se agregan a las conquistas electorales de la oposición, que ya cuenta también con varios Congresos locales.

En ese sentido, Guadalupe Pacheco en su trabajo titulado "La geografía electoral de un partido dominante" se refiere a la conformación de un escenario político completamente distinto al que se tenía hasta poco antes de los noventa, con gobiernos locales de oposición y Congresos divididos.

Analiza estadísticamente los niveles de votación del PRI desde 1982, cuando comienza a decrecer su capacidad de movilización, hasta 1991, en las elecciones de diputados federales a partir de tres variables: PRI, oposición y abstención. Agrupa los distritos en

seis grupos que, basados en dichas variables, fundamentan el deterioro del partido hegemónico debido al significativo incremento de la oferta partidista.

Lo anterior refleja el tránsito de partido hegemónico a partido dominante. José Antonio Crespo, en su artículo "PRI: de la hegemonía revolucionaria a la dominación democrática", señala que éste sólo se puede dar al aceptarse el juego democrático que el PRI ha convalidado, lo cual es contrario a los fundamentos teóricos que señalan que los partidos dominantes nunca fueron hegemónicos y que nacieron como tales a través de la vía electoral y no por la vía armada, intento que en el caso mexicano resultó exitoso, aunque pueda llegar a ser considerado como un híbrido: mitad dominante y mitad partido de Estado.

El régimen continuó vigente a pesar de las pérdidas; el PRI logró mantenerse como dominante en 1994 y 1997 en unos comicios más transparentes y competidos. Sin embargo, tuvo que negociar con la oposición los cambios constitucionales, enfrentar el conflicto en Chiapas, la impunidad política y la crisis económica, pero sin duda uno de sus grandes retos será el de su propia reforma interna y la democratización de los métodos de selección de candidatos con el fin de evitar mayores fracturas y derrotas electorales; de ello dependerá en gran medida su permanencia en el contexto político del 2000.

Bibliografía comentada

- Crespo, José Antonio, "El PRI: de la hegemonía revolucionaria a la dominación democrática", *Política y Gobierno*, vol. I, núm. 1, México, enero-junio de 1994.
- Dresser, Denise, "Muerte, modernización o metamorfosis del PRI: neoliberalismo y reforma partidaria en México", en María Lorena Cook, J. Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas (eds.), *Las dimensiones políticas de la restructuración económica*, México, Cal y Arena, 1996, pp. 211-250.
- Garrido, Luis Javier, *La ruptura. La corriente democrática del PRI*. México, Grijalbo, 1993, 224 pp.
- Langston, Joy, "Sobrevivir y prosperar, una búsqueda de las causas de las facciones políticas intrarrégimen en México", *Política y Gobierno*, vol. II, núm. 2, México, julio-diciembre de 1995.
- , "The PRI governors", *Documentos de trabajo del CIDE*, núm. 66, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1997.
- Pacheco Méndez, Guadalupe, "La geografía electoral de un partido dominante", en Gustavo E. Emmerich (coord.), *Votos y mapas. Estudios de geografía electoral en México*, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1997.
- Whitehead, Laurence, "Una transición difícil de alcanzar: la lenta desaparición del gobierno de partido dominante en México", *Política y Gobierno*, vol. III, núm. 1, México, enero-junio de 1996.